

Concepción, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO:

1º) Comparecen **Carlos Marín Suazo** y **Francesca Petit Huenteo**, casados entre sí, actuando por ellos y en representación legal de su hija menor de edad de iniciales M.A.M.P., todos domiciliados en calle Los Bosques N° 556, sector Huertos de Chillán de esa ciudad, interponiendo recurso de protección contra **Isapre Consalud S.A.** (en adelante la Isapre o Consalud), representada por **Marcelo Dutilh Labbe**, o por quien le suceda o reemplace legalmente en el cargo, ambos domiciliados en Avda. Pedro Fontova N° 6650, comuna de Huechuraba, Santiago. Fundan el presente recurso en los siguientes antecedentes:

a) Señalan que son padres de la menor referida de 4 años de edad, todos afiliados a la Isapre recurrida, la que contractualmente se encuentra obligada a entregarles las prestaciones de salud que correspondan, agregando que su hija padece de un *neurofibroma plexiforme*, afección inoperable, pues se trata de un cáncer a la cadera derecha que compromete el nervio ciático y otros tejidos sanos;

b) Agregan que el médico tratante de la menor, el oncólogo infantil Roberto Campos, presentó el caso de su hija en un comité oncológico, prescribiendo como única opción de tratamiento médico el uso del medicamento *SELUMETINIB*, fármaco de alta tecnología que debe importarse desde Estados Unidos, conocido como “*KOSELUGO*”, cuyo costo asciende a \$ 4.388.285 cada caja; este medicamento debe ser suministrado a la niña cada 12 horas, en ciclos de 28 días, previa hospitalización, puede ser de entre 1 a 7 días; en consecuencia, se requieren para el tratamiento de su hija de 2 cajas mensuales por el mínimo de un año, dependiendo de la evolución médica que ella tenga.

Además, del cáncer que padece la menor, ella fue diagnosticada con un compromiso psicológico derivado de su enfermedad, lo que sumado al riesgo de COVID 19, hizo que el equipo médico recomendara ejecutar el tratamiento de la niña en la Región del Biobío, siendo la Clínica Sanatorio Alemán de esta ciudad el establecimiento que cumple con los estándares y competencias necesarias para llevar a cabo las quimioterapias y el tratamiento de la patología; es decir, durante un año, sumados el



medicamento y los procedimientos médicos que se le deben realizar, que implican hospitalización y resonancias magnéticas, el costo total del tratamiento anual supera los \$110.000.000;

c) Dicen que el 12 de mayo de 2021, Consalud les comunicó formalmente que no cubriría los costos de dicho tratamiento, amparándose en que el medicamento no se encuentra codificado en el Arancel Referencial del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y por ello no es susceptible de cobertura; de esta forma, el debate sobre el incumplimiento de la recurrida se vincula a la protección de garantías constitucionales, muy especialmente al derecho a la salud contemplado en la carta fundamental.

Dado tal rechazo, presentaron un reclamo ante la Superintendencia de Salud, solicitando que la Isapre se hiciera cargo de todos los costos que conlleva tratar esta enfermedad, sin embargo, atendido a lo informado por Consalud en ese procedimiento administrativo, optaron por retirar el reclamo y someter al conocimiento de los tribunales de justicia la resolución del caso, considerando que el fundamento utilizado para negar la cobertura del tratamiento médico es que este medicamento no se encuentra codificado en el Arancel Referencial de FONASA y por ello no es susceptible de cobertura;

d) Sostienen que su hija estuvo hospitalizada desde el 28 al 31 de julio del 2021 para suministrar el medicamento, adquirido directamente en Aztrazeneca S.A. y que el 2 de agosto siguiente presentaron en la Isapre la solicitud de reembolso de dicha compra y de los gastos médicos derivados del tratamiento para combatir el cáncer de cadera que padece la menor, sin embargo, el 16 de agosto pasado, Consalud les comunicó que rechazaba reembolsar la compra del medicamento “*Koselugo*”, pues dicho fármaco no se encuentra en el arancel de FONASA, pese a que no es procedimiento experimental que carezca de un sustento técnico. Además, en oposición a lo señalado por Consalud, la Excma. Corte Suprema, por sentencia dictada el 29 de noviembre de 2019, en la causa Rol 13.311-2019, ordenó a la misma Isapre dar la cobertura requerida, a pesar de tratarse de un dispositivo no arancelado;

e) Afirman que mediante esta acción persiguen poner pronto remedio a la actuación arbitraria de la Isapre recurrida, conducta caprichosa que



soslaya la legalidad vigente y amenaza la vida e integridad física de su hija, agregando que el acto denunciado constituye privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales consagradas en los números 1, 2, y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, derecho a la igualdad y derecho a la salud, respectivamente;

f) Finalizan solicitando tener por interpuesto este recurso de protección, acogerlo a tramitación, y ordenar que se reestablezca el imperio del derecho, ordenando a Isapre Consalud S. A., otorgar la cobertura adicional para enfermedades catastróficas (CAEC) y bonificar tanto la adquisición del medicamento *Selumetinib* (*Koselugo*), como el procedimiento médico necesario para suministrarlo, agregando que las prestaciones médicas que motivan este recurso se deben realizar en la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, o bien, en el prestador que su equipo médico recomiende, debiendo abstenerse la recurrida, ante futuros procedimientos médicos derivados del tratamiento de esta u otras patologías cancerosas, de rechazar la cobertura del medicamento y del respectivo procedimiento médico, con costas.

2º) Informó por la Isapre recurrida el abogado **Marco Rosso Bacovic**, quien señaló:

a) En primer lugar, alegó la extemporaneidad del recurso pues la recurrente accionó de protección contra Consalud, indicando que el rechazo de la cobertura solicitada se les comunicó el 12 de mayo del presente año, negativa contra la cual dedujeron demanda arbitral ante la Superintendencia de Salud, de la que se desistieron el 17 de junio pasado.

Luego, es evidente que ambos recurrentes estaban en conocimiento del acto contra el que ahora reclaman, consistente en el rechazo de la cobertura solicitada, ese día 12 de mayo de 2021, o bien, al menos, desde que se desistieron de la demanda arbitral -el 17 de junio siguiente-, incluso desde la fecha en que se resolvió el desistimiento -15 de julio de 2021-; en todas esas hipótesis el plazo señalado en numeral 1 del Auto Acordado sobre la materia, para deducir el recurso de protección, ya estaba vencido al



23 de agosto de 2021, fecha de presentación de la presente acción de protección;

b) Opuso también la excepción de cosa juzgada, porque los actores dedujeron demanda ante la Superintendencia de Salud, en su calidad de sede arbitral, acogiéndose a tramitación bajo el Rol N° 300263-2021, sin embargo, al haberse desistido de ella, se produjo la renuncia a la pretensión, la que se extinguió con efecto de cosa juzgada, según lo señala el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. Luego, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 175 del mismo texto, la resolución de 15 de julio de 2021 que aceptó el desistimiento de los recurrentes extinguió la pretensión con autoridad de cosa juzgada;

c) En cuanto al fondo, luego de señalar el diseño legal de las Isapres, afirma que la prestación cuya cobertura se solicita no es susceptible de ser cubierta por el plan complementario de salud ni por el CAEC, ya que se requiere que ellas estén incorporadas en el arancel de FONASA, o bien, en el arancel de la Isapre;

d) Sobre el hecho impugnado, el informante sostiene que el 23 de marzo 2021 los recurrentes activaron cobertura GES 14-CÁNCER EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS, designándoseles como prestadores Red Oncored y Clínica Sanatorio Alemán. Posteriormente se recibió informe médico de la Clínica Sanatorio Alemán, prescribiendo el medicamento *Koselugo*, respondiendo la Isapre que dicho fármaco no tiene cobertura; asimismo, ante la solicitud de los recurrentes de obtenerlo mediante cobertura CAEC, el 12 de mayo pasado se les respondió que dicho medicamento no tiene cobertura, por lo que se rechazó la solicitud.

Posteriormente y, con pleno conocimiento del rechazo de la cobertura CAEC, el 2 de agosto último el recurrente solicitó a la Isapre el reembolso de la compra del medicamento, lo que fue rechazado por Consalud, en concordancia con la anterior negativa del 12 de mayo de 2021, la que era de pleno conocimiento de los recurrentes;

e) Afirma que la decisión de Consalud no puede ser calificada de arbitraria o ilegal, ya que la normativa que rige la materia excluye de la cobertura CAEC al medicamento *Koselugo*, al no estar arancelado en FONASA y carecer de registro en el Instituto de Salud Pública (ISP), por lo



que no hubo de su parte arbitrariedad o ilegalidad, sino que un estricto apego a la normativa vigente, que excluye de cobertura CAEC al presente caso;

f) Por lo mismo no se puede imputar a la Isapre alguna vulneración de las garantías constitucionales que los actores mencionan en el recurso, ya que su representada sólo limitó a aplicar el contrato de salud y la normativa que rige la materia;

g) Finaliza solicitando tener por evacuado el informe solicitado y, en base a las consideraciones de hecho y derecho expuestas, negar lugar a la presente acción cautelar, con costas.

3º) Compareció Felipe Saavedra Morales, Jefe de Asesoría Jurídica del ISP, acompañando un informe del Jefe del Departamento Nacional de Medicamentos del ISP, en el que se explica que el medicamento *Selemetinib* ha mostrado una tasa de respuesta global que permite asociarlo a una mejoría del dolor y un perfil de eventos adversos manejables y, asimismo, no se cuenta con antecedentes que permitan evidenciar la necesidad de hospitalización de la menor, sin embargo, de acuerdo al criterio médico y las condiciones actuales de la paciente, como la condición actual de pandemia, es muy probable que se requiera un monitoreo más estrecho por parte del equipo profesional que atiende a la menor.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad.

PRIMERO: Que, la Isapre recurrida alegó la extemporaneidad del presente recurso, señalando que los actores conocían la negativa de la Isapre para dar la cobertura solicitada desde el 12 de mayo del presente año, fecha en que se les notificó que el medicamento *Koselugo*, al no estar arancelado en FONASA, ni registrado por el ISP, no podía incluirse en la cobertura CAEC; contra esa negativa los recurrentes interpusieron demanda en procedimiento arbitral ante la Superintendencia de Salud, desistiéndose de ella. Posteriormente, el 2 de agosto de 2021, el recurrente solicitó a la Isapre reembolsar la compra de dicho medicamento, presentación que fue rechazada por Consalud el 16 de agosto siguiente. Afirma, en consecuencia, que, al 23 de agosto pasado, fecha de interposición del presente recurso, el



plazo fatal de 30 días corridos para interponer la acción, contado desde aquel 12 de mayo, había transcurrido en exceso.

SEGUNDO: Que, será desestimada la anterior alegación, porque si bien la Isapre, el 12 de mayo de 2021, comunicó su rechazo a la cobertura CAEC, tanto para adquirir el medicamento *Koselugo*, como para brindarle debido tratamiento a la hija menor de edad de los recurrentes, de iniciales M.A.M.P., lo cierto es que el 16 de agosto pasado, la recurrida comunicó a los padres de la paciente que no reembolsaría la compra de dicho medicamento, insumo médico necesario para tratar el cáncer que padece dicha paciente. Con esta negativa, Consalud materializó en un acto objetivo y tangible aquella primera decisión de no otorgar la cobertura solicitada por los recurrentes para el tratamiento de la patología cancerígena que afecta a su hija.

TERCERO: Que, en consecuencia, habiéndose presentado el presente recurso de protección el 23 de agosto del presente año, ha de entenderse que el mismo se interpuso dentro del plazo fatal de 30 días corridos señalado en el numeral 1) del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, privilegiándose, de este modo -y en las particulares circunstancias recién apuntadas-, el ejercicio efectivo de la acción constitucional conservativa de que se trata, por sobre decisiones de clausura de orden meramente formal.

II.- En cuanto a la alegación de cosa juzgada.

CUARTO: Que, la recurrida sostuvo que en la especie concurría la institución de la cosa juzgada, en atención a que los recurrentes, luego de demandar en procedimiento arbitral a la Isapre por su negativa de 12 de mayo de 2021, se desistieron de ese procedimiento, interponiendo, después de que la Superintendencia de Salud los tuvo por desistidos de su reclamo, la presente acción cautelar.

QUINTO: Que, no hay controversia que, ante la negativa de la Isapre a brindar la cobertura solicitada, los actores reclamaron contra ella en la Superintendencia de Salud, iniciándose un procedimiento arbitral del cual se desistieron posteriormente. Sin embargo, tal dimisión en absoluto puede servir para que ahora la recurrida se excepcione alegando cosa juzgada en su favor.



SEXTO: Que, desde luego se debe considerar que, para aceptar la concurrencia de la cosa juzgada, el tribunal llamado a declararla debe constatar la concurrencia de la triple identidad que exige el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil en cuanto señala: **“Art. 177 (200).** *La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya:*

1° Identidad legal de personas;

2° Identidad de la cosa pedida; y

3° Identidad de la causa de pedir.

Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.”

Sobre estos tres requisitos se ha dicho que la identidad legal de personas exige que las partes que litigan en ambos pleitos deben hacerlo en las mismas calidades; en el procedimiento arbitral la Isapre es la reclamada y en esta acción cautelar es la recurrida, es decir, en ambos tiene calidad de sujeto pasivo, mientras que los actores son sujetos activos en las dos sedes.

En cuanto a los dos restantes requisitos, se exige que el objeto pedido y la causa de pedir sean idénticos en ambos pleitos, mientras que la cosa pedida es el beneficio jurídico que el sujeto activo pretende conseguir mediante el ejercicio de una determinada acción.¹

Ahora bien, del cotejo de las peticiones concretas contenidas en el reclamo presentado ante la Superintendencia de Salud y en el presente recurso, se aprecia que lo solicitado en una y otra presentación difiere sustancialmente, porque ante la Superintendencia lo que se solicita es que se declare la obligación de la Isapre de otorgar la cobertura solicitada, mientras que en esta acción se pide que, por vía de la constatación de un acto ilegal y arbitrario cometido por Consalud y la consecuente vulneración de uno o más derechos/garantías constitucionales de los actores, en especial la afectación al derecho a la vida y a la salud de su hija, se pide que esta Corte ordene a dicha Isapre otorgar las coberturas adicionales que viene

¹ En ese sentido, Fernando Orellana, “Manual de Derecho Procesal, tomo II, Procedimientos civiles ordinarios y especiales, Edit. Librotecnia, reimpresión de la 3ª ed. actualizada, 2010, pag. 112.



negando a los recurrentes, observándose, entonces, que no hay similitud en la causa de pedir de una y otra gestión.

Pero, tan importante como la distinción que se acaba de hacer, es la diferente naturaleza de ambos procedimientos; allá es de carácter administrativo y acá es jurisdiccional, circunstancia que nos lleva a considerar el tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República, que al establecer la procedencia de esta acción de cautela de garantías constitucionales, señala que fue concebida por el Constituyente “...para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” (destacado y subrayado nuestro), haciendo perfectamente compatible acciones deducidas en otras sedes, que perfectamente pueden llegar a una resolución de término, con esta de naturaleza cautelar.

En consecuencia, la alegación de cosa juzgada opuesta por la recurrida será también rechazada.

III.- En cuanto al fondo.

SÉPTIMO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

OCTAVO: Que, el acto recurrido consiste en la negativa de Isapre Consalud, de otorgar cobertura CAEC para adquisición del medicamento *SELUMETINIB*, conocido como “*KOSELUGO*”, necesario para el tratamiento la patología *neurofibroma plexiforme*, afección cancerígena inoperable, que compromete el nervio ciático y otros tejidos sanos de la cadera derecha de M.A.M.P., hija menor de edad de los recurrentes.

Sobre el particular, la recurrida se ha opuesto porque si bien se otorgó cobertura CAEC a través de los prestadores Oncored y Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, el medicamento prescrito no se encuentra



arancelado por FONASA y no ha sido registrado por el ISP, lo que impide tanto su adquisición por la Isapre, como el reembolso de su valor de compra, en caso de ser comprado directamente por el afiliado.

NOVENO: Que, si bien la actuación de la Isapre recurrida se sustenta en el contrato de salud que mantiene con el afiliado y en la activación del CAEC para la atención de su hija, no está discutido que la paciente se encuentra atendiéndose en los prestadores dispuestos por Consalud, esto es, Oncored y Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, quienes han prescrito, como tratamiento para el cáncer a la cadera derecha que afecta la hija de los actores, dada la imposibilidad/ inconveniencia/ riesgos asociados de someterla a una intervención quirúrgica, una terapia basada en la administración del medicamento *SELUMETINIB*, conocido como “*KOSELUGO*”, cuyo costo asciende a \$ 4.388.285 por caja, el que debe serle suministrado cada 12 horas, en un ciclo de 28 días, previa hospitalización que puede variar de 1 a 7 días, requiriéndose 2 cajas mensuales de dicho fármaco por un tiempo mínimo de un año, dependiendo de la evolución médica que ella tenga.

Sin embargo, Consalud se niega a cubrir los costos de dicho tratamiento invocando para ello que el medicamento no está arancelado en FONASA ni registrado por el ISP.

DÉCIMO: Que, tal negativa aparece carente de todo razonamiento y justificación dado que no se apoya en razones médicas, sino que en cuestiones meramente formales que la hacen arbitraria, al desatender el tratamiento medicamentoso propuesto por los propios prestadores designados por la Isapre, única alternativa viable para recuperar la salud de la paciente y/o otorgarle una mejor calidad de vida.

UNDÉCIMO: Que, la arbitrariedad advertida constituye un atentado a las garantías de los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que no se puede soslayar que la privación del tratamiento médico debidamente dispuesto por los profesionales competentes para recuperar la salud de la menor M.A.M.P., atenta contra su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, derecho fundamental de excepcional relevancia y que ha de privilegiarse frente a las razones administrativas, económicas y mercantiles que invoca la



Isapre, cuando se refiere a los impedimentos para acceder a los requerimientos de los recurrentes, padres de la paciente.

También se afecta el derecho a la igualdad, porque otros pacientes en la misma situación de la menor, si han recibido la cobertura completa que se requiere tratar sus enfermedades y recuperar su salud.

DUODÉCIMO: Que, la Excma. Corte Suprema, frente a un caso similar al que nos ocupa, resolvió recientemente lo siguiente: **“Tercero:** *Que, tratándose en la especie de una impugnación por la negativa a otorgar Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas (CAEC) a un medicamento porque éste no se encuentra en el arancel Fonasa y tampoco se encuentra registrado en el Instituto de Salud Pública, se debe analizar en su estudio los fundamentos de su prescripción médica. Para estos efectos, las circunstancias fácticas deben ilustrar la decisión del asunto y es así como de los propios antecedentes...*” (médicos que se detallan en el fallo).

“Cuarto: *Que, en esta línea de razonamiento, el factor de la indicación médica como el sustrato profesional objetivo y adecuado en el tratamiento de una enfermedad, implica que determinado tratamiento para afrontar, en este caso, la patología denominada cáncer de páncreas localmente avanzado, es el medio apto e idóneo para solucionarlo. Por lo demás, el mismo no es un modo experimental que carezca de un sustento técnico, encontrándose, contrariamente a lo sostenido por la recurrida, registrado - el medicamento en cuestión- en el I.S.P. bajo los n.ºs F-25441/20 y F-25442/20, como asimismo respaldado en los avances científicos, que en razón de su velocidad de desarrollo, no alcanzan a ser recogidos oportunamente por la Administración, circunstancia que no debería constituir óbice para realizar la homologación que sea necesaria a efectos de posibilitar el acceso a los tratamientos médicos prescritos.*

Quinto: *Que, en la operatoria de homologación del medicamento aludido, obviamente la recomendación médica y técnica debe resultar prioritaria, teniendo presente, asimismo, que para la institución previsional el costo económico y financiero no resultará imprevisto, toda vez que el monto solicitado homologar alcanza sólo a aquellos que el arancel establece por la prestación a la cual se homologa. Razonar de otra forma importaría aceptar la omisión de la Administración, la cual por medio de su pasividad*



excluiría determinados medios aptos para mantener o recuperar la salud, con mayor razón si éstos ya son empleados con un fin terapéutico.

Sexto: *Que, de lo razonado en los fundamentos que anteceden, ha quedado de manifiesto que con la negativa de la recurrida a proporcionar Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas (CAEC) a un medicamento indispensable para la sobrevivencia e integridad física del recurrente, sobre la base de consideraciones formales y en las que subyacen, en definitiva, razones índole económica, ésta ha incurrido en un acto arbitrario que amenaza su derecho a la vida, puesto que el actor no se encuentra en condiciones de adquirirlo por su alto costo, de modo que la determinación impugnada en autos no permite el acceso a aquel fármaco imprescindible para el tratamiento de la patología que aquél sufre.*

Séptimo: *Que, en este orden de ideas, es preciso señalar que la Ley N° 21.258 que Crea la Ley Nacional del Cáncer, establece dentro de los principios que la inspiran: “a) Cooperación: se deberá fomentar la cooperación público privada, intersectorial e interinstitucional”. En tanto su reglamento respectivo señala que: “por su incidencia, el cáncer debe ser considerado como un problema de salud pública. Asimismo, por los costos involucrados para abordar dicha enfermedad, es también un importante problema social y económico, con repercusión y costos que afectan a las personas, sus familias y comunidades, así como al sistema de salud y al país en su conjunto. Que, el Ministerio de Salud ha priorizado al cáncer como un problema relevante de salud pública en el país, realizando esfuerzos organizados y sostenidos que abarcan desde la prevención hasta los cuidados paliativos”.*

Sobre la base de los ejes normativos referidos, resulta ineludible para la recurrida, en su calidad de institución de salud previsional privada, alinear su actuar a la política pública descrita y favorecer el acceso de sus afiliados a todas aquellas acciones de salud que les permitan sobrellevar y recuperarse del tipo de patología descrita en estos autos.

Octavo: *En consecuencia, conforme lo que se viene reflexionando, el medicamento referido debe ser cubierto conforme se indicará en lo resolutivo del presente fallo... ’²*

² Excma. Corte Suprema, sentencia de 8 de julio de 2021, dictada en el Rol N° 28.967-2021.



A mayor abundamiento, una decisión en el mismo sentido fue adoptada por esta Corte en la causa Rol N° 35.967-2019, Protección, en sentencia de 6 de diciembre de 2019.

DECIMOTERCERO: Que, en razón de lo expuesto y para salvaguardar los derechos a la vida y la igualdad, como garantías fundamentales previstas en la Constitución Política de la República, la protección impetrada será acogida en la forma como se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Se rechazan las alegaciones de extemporaneidad y de cosa juzgada opuestas por la recurrida.

II.- Se acoge con costas, el recurso de protección deducido por Carlos Marín Suazo y Francesca Petit Huenteo, por sí y en representación legal de su hija menor de edad de iniciales M.A.M.P. y en contra de Isapre Consalud S.A., disponiéndose que la recurrida deberá otorgar la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, bonificando tanto la adquisición del medicamento SELUMETINIB (*KOSELUGO*), como la aplicación del procedimiento médico que sea necesario para suministrar dicho medicamento a la paciente menor de edad de iniciales M.A.M.P., hija de los recurrentes, mientras ello sea necesario para el debido tratamiento y recuperación de la patología cancerígena *neurofibroma plexiforme* que la afecta y que es inoperable. Todas estas prestaciones médicas se llevarán a cabo en la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción o bien con el prestador que el equipo médico de la paciente recomiende.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro (I) Waldemar Koch Salazar.

Rol N° 9.928-2019. Protección





XGRKKWDXXH

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Carola Rivas V., Juan Angel Muñoz L. y Ministro Suplente Waldemar Augusto Koch S. Concepcion, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

